

21ª REUNION — 13ª SESION EXTRAORDINARIA — MARZO 20/21 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Miguel P. Del Pero

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
AGUIRRE CÁMARA, José
ALFONSO, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ANTÓN, Luis
ARIAS, Luis Osvaldo
ARRASCAETA, Félix de
ARROYO, Ramón F.
AVETA, Francisco O.
ÁVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BERRINI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CAIJO, Carlos Alberto
CANTONI, Angel Serafin
CARDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CASAS, David Jorge
CATALAN, Guillermo
CENTENO, José Isaac
COGGIOLA, Luis S.
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COSTANTINO, Adolfo I.
CUERDO, Ramón

CHEBLE, Francisco R.
CHRISTE, Jorge J.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DEL PERO, Miguel P.
DIAZ, Diógenes C.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
DI LEO, Amadeo
DOMÍNGUEZ, Luis C.
ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNANDEZ, José M.
FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ MENDY, Julio O.
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERRARI, Luis
FERREIRA, Jorge W.
FIGUEROA, Jaime Hernán
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GARAY, Fermín J.
GARCIA, Horacio
GARCIA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GAROFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GODOY, Ruperto Honorio
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZALEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIERREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGUESIAS, Israel
JOFRÉ, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LEÓN, Luis Agustín
LESCANO, Edmundo A.
LILJESTROM, Eduardo R.
LOZANO, Martín
LUJO, Juan A.
LIAVER, Felipe
LLORENS, Héctor
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MANSILLA, José R.
MARSICO, Adalberto O.
MARTINEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.

MÉNDEZ DOYLE, Abel Víctor
MERCADO, José Ignacio
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MIRANDA GALLINO, Fernando A.
MOLINAS, Ricardo F.
MOR ROIG, Arturo
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUJICA, Manuel Martín
MUNIAGURRIA, Camilo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSITANI, Héctor Francisco
NOUGUES, Isaias J.
OBREGÓN, Pedro A.
OCAMPO, Carlos F.
OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNÁNDEZ, Angel H.
PALACIOS, Alfredo L.
PATLIS, León
PENA, Roberto M.
PEREIRA, Antonio
PÉREZ GALLART, Alcides B.
PERNASSETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estantiano
PIRAGINE NIVEYRO, Fernando
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor S.
PUGLIESE, Juan C.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RENE, José María
REQUENA, Raúl María
RIAL, Oscar
ROBERTO, Mario
RODRIGUEZ, Rogelio Ramón
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
ROIS, Roberto
ROMEU VERDIER, Gabriel
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayib
SALADO, Francisco A.
SANTA MARIA, Oscar Hipólito
SARRULLE, Oscar E.
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo G.
SERÚ GARCIA, Alberto

SOLANA, Jorge D.
 SOLARI, Eduardo A.
 SOLARI, Juan Antonio
 TARULLI, Pascual
 TORREIRO, Raúl
 TORRIGLIA, Enrique F.
 TORTONESE, Dante Oscar
 TROCCHI, Antonio A.
 VACA LOBO, Juan Manuel
 VACCAREZZA, Eduardo H.
 VALENTE de PÉREZ TORT, Lidia
 VAZQUEZ POL, José
 VEDIA, Enrique de
 VENTEMIGLIA, Rogelio A.

VILLANUEVA, Julio
 ZANONI, Juan Claudio
 ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON LICENCIA:

ARANA, Tomás P.
 LONGHI, Julio P.
 MALDONADO, Carlos A.
 MARTINEZ, Ramón S.
 SCALITER, Juan
 TACHELLA, Elberto S. J.
 ZANICHELLI, Arturo O.

AUSENTES, CON AVISO:

CASTELLAR, Miguel A.
 DOMINGORENA, Horacio O.
 PÉREZ, Raúl
 SANDLER, Héctor R.

AUSENTES SIN AVISO:

MONTE, Ricardo Alvaro
 PEDRINI, Ferdinando
 PENSA Y LILLO, Silvestre
 RITACCO, Araldo A.
 RODRIGUEZ VAGARIA, Eduardo
 VISALS, Fernando J.

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría. (Pág. 2344.)

2.—Asuntos entrados:

I.—Poder Ejecutivo:

- 1.—Mensaje y copia del decreto 1.965/64 por el que se incluyen nuevos temas para su consideración en las sesiones extraordinarias. (Pág. 2345.)
- 2.—Mensaje y proyecto de ley por el que se deroga el último párrafo del artículo 1° y el artículo 2° de la ley 16.092, sobre régimen jubilatorio de legisladores nacionales. (Página 2345.)
- 3.—Mensaje y proyecto de ley por el que se instituye la ley orgánica de los partidos políticos. (Pág. 2346.)

II.—Comunicación del Honorable Senado. (Página 2357.)

III.—Proyectos de ley:

- 1.—Del señor diputado Fraga: modificaciones a la ley 9.688 (accidentes del trabajo). (Página 2357.)
- 2.—Del señor diputado Ferrari y otros: subsidio a damnificados por las inundaciones producidas en la provincia de Santa Fe. (Página 2358.)
- 3.—Del señor diputado Arrascaeta: subsidio a damnificados por las inundaciones producidas en las provincias de Catamarca, La Rioja y Santa Fe. (Pág. 2358.)
- 4.—Del señor diputado Antón: reparación de edificios de establecimientos educativos nacionales en la provincia de Misiones. (Página 2359.)
- 5.—Del señor diputado Tarulli: modificaciones al decreto ley 4.827/53 (ley 14.467), reformado por ley 16.001, sobre cómputo de servicios, a efectos jubilatorios, de periodos de inactividad por causas políticas o gremiales. (Pág. 2359.)

6.—Del señor diputado Nougues: venta en pública subasta de automotores que se encuentren en el país sin haber pagado aún los recargos correspondientes. (Pág. 2360.)

7.—Del señor diputado Contini y otros: creación de la Fundación Coronel Plácido Obligado y Dolores Obligado de Obligado. (Página 2360.)

8.—Del señor diputado Fabrizio y otros: aumento en el monto de las pensiones a la vejez. (Pág. 2361.)

9.—Del señor diputado Miganne: subsidio a la Comisión Mixta de la Cooperadora del Colegio Nacional y Club de Pelota, Social y Deportivo, de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. (Pág. 2362.)

10.—Del señor diputado Schaposnik y otros: subsidio a la Sociedad de Socorros Mutuos Cosmopolita de Trabajadores de Junín. (Página 2362.)

11.—Del señor diputado Tarulli: exención del cumplimiento del servicio militar a los ciudadanos egresados de la Escuela de Policía General José de San Martín, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. (Pág. 2363.)

12.—Del señor diputado Tarulli: creación de una escuela hogar en la ciudad de San Miguel de Tucumán. (Pág. 2363.)

IV.—Proyectos de resolución:

1.—Del señor diputado Arrascaeta: inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias de las iniciativas sobre ayuda a damnificados por las recientes inundaciones. (Página 2364.)

2.—Del señor diputado Cantoni y otros: actualización de los coeficientes jubilatorios. (Página 2364.)

3.—Del señor diputado Vedia: modificación del artículo 61 del reglamento de la Honorable Cámara. (Pág. 2364.)

4.—Del señor diputado Centeno y otro: construcción de la red cloacal y provisión de agua potable en Mburucuyá, provincia de Corrientes. (Pág. 2365.)

5.—Del señor diputado **Pena**: compilación y edición de las obras de don Crisólogo F. Larralde. (Pág. 2365.)

6.—Del señor diputado **Cheble**: pago a los obreros de la provincia de Santiago del Estero de lo adeudado por la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino y Altos Hornos Zapla. (Pág. 2365.)

7.—Del señor diputado **Ghioldi**: investigación acerca de los libros de texto que se utilizan en los establecimientos de enseñanza. (Página 2366.)

8.—Del señor diputado **Bobillo**: construcción y terminación de centrales hidroeléctricas en el interior del país. (Pág. 2367.)

V.—Proyectos de declaración:

1.—Del señor diputado **Fernández Mendy**: mejoramiento del servicio del Ferrocarril General Belgrano, en el ramal comprendido entre las estaciones Sáenz y González Catán. (Pág. 2371.)

2.—Del señor diputado **Oreja**: participación de la República Argentina en la Feria Mundial de Nueva York. (Pág. 2372.)

VI.—Proyectos de resolución y de declaración (fundamentos verbales —artículo 154 del reglamento—):

Proyectos de resolución

1.—Del señor diputado **Pernasetti** y otros: adopción de medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones en Chumbicha, Catamarca, y en la provincia de La Rioja. (Pág. 2372.)

2.—Del señor diputado **Luco** y otros: pedido de informes sobre la detención de un ciudadano en la base naval de Puerto Belgrano. (Pág. 2372.)

3.—Del señor diputado **Schaposnik**: pedido de informes sobre la decisión de la Dirección Nacional de Agua y Energía Eléctrica de tomar a su cargo el servicio de suministro eléctrico que prestaba la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada, de Zárate. (Pág. 2373.)

Proyecto de declaración

Del señor diputado **Tarulli**: instalación de filiales de las cajas de previsión social en la ciudad de San Miguel de Tucumán. (Página 2373.)

3.—**Moción** del señor diputado **Pizarro** para que el proyecto de ley sobre estatuto de los partidos políticos sea girado también a la Comisión de Legislación General. Se vota y resulta negativa. (Pág. 2373.)

4.—**Licencias** concedidas a los señores diputados: 1, Rodríguez Vagaría; 2, Longhi; 3, Scaliter; 4, Gómez Machado; 5, Maldonado; 6, Martínez; 7, Arana. (Pág. 2374/5.)

5.—**Homenaje** a la memoria del ex diputado nacional doctor **Emir Mercader**. (Pág. 2375.)

6.—**Moción** del señor diputado **Pugliese** para que la Cámara pase a cuarto intermedio a fin de que la Comisión de Labor Parlamentaria proponga el plan a seguir en la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pág. 2382.)

7.—**Autorización** a la Comisión de Industria para remitir a la Comisión Especial investigadora sobre petróleo diversos antecedentes solicitados por ésta. (Pág. 2382.)

8.—**Destino de proyecto**. Se rectifica, a pedido de la Comisión de Industria, el destino del proyecto de resolución de los señores diputados Cárdenas y Tarulli sobre constitución de una comisión bicameral encargada de estudiar y proyectar una ley que regule la actividad azucarera. (Pág. 2382.)

9.—**Plan de labor** para la sesión de la fecha formulado por la Comisión de Labor Parlamentaria por intermedio del señor diputado **Ghioldi**. Se aprueba. (Pág. 2382.)

10.—Consultas, mociones de preferencia y pedidos de pronto despacho:

I.—**Moción** del señor diputado **Ferreira** para que se considere sobre tablas su proyecto referente a la constitución de una comisión bicameral para la reactivación y el desarrollo económico, la normalización financiera y la defensa social. Se vota y resulta negativa. (Pág. 2383.)

II.—**Moción** de preferencia del señor diputado **Ruiz** respecto al proyecto sobre repatriación de los restos del doctor **Ramón Carrillo**. (Página 2386.)

11.—**Cuestión de privilegio** planteada por el señor diputado **Sarrulle**. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 2387.)

12.—**Cuestión de privilegio** planteada por el señor diputado **Casas**. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 2388.)

13.—**Arrendamientos y aparcerías rurales**. Termina la consideración de los dictámenes de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión sobre prórroga de contratos de arrendamiento o aparcería, y archivo de juicios de desalojo de predios rurales. (Orden del día número 10.) Se sanciona. (Pág. 2389.)

14.—**Informes sobre cuestiones agropecuarias**. La Honorable Cámara constituida en comisión considera el proyecto de resolución respectivo. Se aprueba el proyecto de resolución por el que se piden informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones agropecuarias. (Pág. 2454.)

- 15.—**Unión Interparlamentaria.** Se autoriza al señor presidente de la Honorable Cámara a representarla en la reunión que celebrará en Lucerna la Unión Interparlamentaria. (Pág. 2457.)
- 16.—**Adquisición de inmueble** para instalación de comisiones de la Honorable Cámara. Se aprueba. (Pág. 2460.)
- 17.—**Comisión Especial investigadora sobre petróleo.** La Honorable Cámara constituida en comisión considera el proyecto sobre aumento del número de miembros de dicha comisión. Se resuelve aumentar a dieciocho el número de miembros de la comisión de referencia. (Pág. 2460.)
- 18.—**Inclusión de asuntos en las sesiones extraordinarias.** Se aprueba el proyecto de resolución por el que se invita al Poder Ejecutivo a incluir en el presente período de sesiones extraordinarias las iniciativas relativas a ayuda a los damnificados por recientes inundaciones. (Pág. 2463.)
- 19.—**Comisión Especial bicameral sobre el azúcar.** Se aprueba su constitución. (Pág. 2465.)
- 20.—**Autorización** conferida a la Presidencia para girar los mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo a las respectivas comisiones y convocar a la Honorable Cámara cuando haya dictamen. (Pág. 2465.)
- 21.—**Moción** del señor diputado **Fernández (R.)** para que se considere un proyecto de resolución del señor diputado **Pernasetti**. (Pág. 2465.)
- 22.—**Apéndice:**
- I.—**Sanciones** de la Honorable Cámara. (Página 2467.)
- II.—**Nómina** de asuntos que pasan al Archivo. (Página 2469.)

—En Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo de 1964, a la hora 9 y 30:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Elena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Elena.

Sr. Elena. — Señor presidente: deseo que por Secretaría se informe cuántos diputados hay en la casa y cuántos se hallan presentes en el recinto. Creemos que los señores diputados no pueden faltar al cumplimiento de su deber, sobre todo en estos momentos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Secretaría informa que se encuentran en la casa sesenta señores diputados y que están presentes treinta y seis en el recinto.

Sr. Elena. — Propongo que se siga llamando hasta obtener quórum, confiando en que los señores diputados concurrirán al recinto, sobre todo en el día de hoy, en que es necesario que el cuerpo delibere con eficacia y con urgencia.

Sr. Antón. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Antón.

Sr. Antón. — Señor presidente: en otra oportunidad nuestro bloque manifestó que solicitaría el levantamiento de la sesión de no existir quórum al cumplirse el plazo estipulado por el reglamento. En aquella ocasión, dada la urgencia de los temas que se estaban considerando y la necesidad de no obstaculizar al Poder Ejecutivo en su programática económica, este bloque retiró la moción. Pero en estos momentos formulo la moción de que se levante la sesión por falta de quórum, moción que debe votarse de inmediato, por ser de orden.

Sr. Elena. — Ruego al señor diputado que tenga en cuenta que la Cámara ha de rendir homenaje a un ex diputado que ha brindado al cuerpo y al país el máximo de su talento, de su preocupación y de su mayor desinterés.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — Amablemente, solicito al señor diputado Antón que retire la moción que acaba de formular. No sólo existen razones de eficacia de la labor que desarrolla la Cámara, la que debe terminar la discusión del dictamen sobre arrendamientos y aparcerías rurales, sino que hay un motivo muy especial cual es la desaparición de un ex miembro de este cuerpo a quien nosotros nos proponemos rendir homenaje.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta el señor diputado Antón el temperamento propuesto?

Sr. Antón. — Acabo de llegar de la capilla ardiente del ex diputado Emir Mercader. Creo que la Cámara debía rendir el homenaje que tenía propuesto, pero los señores diputados comprenderán que por esa misma circunstancia todos los miembros de este cuerpo debieron haber estado presentes a primera hora, ya que se iba a tributar tal acto en recuerdo de un ex legislador desaparecido. Insisto en mi moción, señor presidente.

Sr. Elena. — Ruego al señor diputado que no insista en su moción. No resulta elegante ni simpático insistir en que se levante la sesión, en estos momentos en que el pueblo exige el mayor esfuerzo y la mayor preocupación del Parlamento argentino.

Sr. Antón. — Voy a modificar en cierta medida mi propuesta a condición de que se siga llamando sólo por media hora más. Que durante esa media hora los señores diputados de los distintos bloques hagan las gestiones necesarias para lograr quórum, ya que a las 10 en punto repetiré la moción de levantar la sesión. Con esa condición, retiro mi propuesta.

Sr. Fernández Núñez. — El señor diputado no puede imponer esas normas a la Cámara. No acepto esas condiciones.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pugliese.

Sr. Pugliese. — En cierta forma el señor diputado Antón ha modificado su criterio y adherido a la proposición de que se continúe llamando por media hora más.

Simplemente deseo decir dos palabras. Admitiría la proposición retirada por el señor diputado Antón cuando se tratara de una Cámara que está trabajando irregularmente y como un medio de sancionar una inactividad permanente del cuerpo. En ese caso sería admisible el pedido de levantamiento de la sesión. Pero una Cámara que viene trabajando con regularidad y solamente con la pequeña deficiencia que se produce en las horas matutinas, en estas sesiones que se realizan por la mañana, no se justifica de manera alguna que nos veamos abocados a la violencia de estos pedidos de levantamiento de la sesión, apenas transcurrido un minuto del vencimiento de la media hora de tolerancia.

Pero como no creo que haya nada en discusión, señor presidente, aceptamos que se continúe llamando durante media hora más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Así se hará, señor diputado; se continuará llamando durante treinta minutos.

—Se continúa llamando.

—A la hora 10:

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Mor Roig). — Con la presencia de 98 señores diputados en el recinto, queda abierta la sesión. Además, la Presidencia cumple en informar que en la casa se encuentran 102 señores diputados.

Como no existen actas a someter a la aprobación de la Cámara, se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Poder Ejecutivo

1

Buenos Aires, 18 de marzo de 1964.

A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, llevando a su conocimiento en copia legalizada adjunta el decreto 1965 dictado en el día de la fecha, por el que se amplía los temas a tratarse en las sesiones extraordinarias convocadas por decreto 1.205/63.

Conforme se anunciara en el mensaje 1211, se incluyen en el temario de las sesiones extraordinarias la consideración de los decretos leyes y de los asuntos cuya urgencia e importancia exigen solución inmediata, a juicio del Poder Ejecutivo y de la opinión del país.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.
Juan S. Palmero.

Buenos Aires, 18 de marzo de 1964.

Visto el decreto 1.205, de fecha 5 de diciembre de 1963, por el cual se convoca al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Inclúyense entre los asuntos a considerar por el Honorable Congreso durante las presentes sesiones extraordinarias los siguientes temas:

- I.—Ley orgánica de los partidos políticos.
- II.—Legislación penal (enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, delitos electorales, etcétera).
- III.—Consejo Económico Social.
- IV.—Montos mínimos de los importes jubilatorios y de las pensiones.
- V.—Cómputo jubilatorio para cesantes por causas políticas o gremiales.
- VI.—Aumento en las pensiones a la vejez.
- VII.—Derogación de dispositivos relativos al régimen jubilatorio de los legisladores nacionales.
- VIII.—Amnistía para infractores electorales.
- IX.—Modificación del artículo 21 de la ley de enrolamiento.
- X.—Decretos leyes.
- XI.—Ley de fomento del saneamiento urbano del interior del país.
- XII.—Salario mínimo vital y móvil.

Art. 2º — El presente decreto será refrendado por el señor ministro secretario en el departamento del Interior.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA.

Juan S. Palmero.

—Al Archivo.

2

Buenos Aires, 18 de marzo de 1964.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, sometiendo a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se deroga el último párrafo del artículo 1º de la ley 16.092, modificatorio del artículo 5º de la ley 14.514, y también derógase el artículo 2º de la misma ley, primeramente citada.

No se estima prudente la vigencia de normas legales que, por razón del desempeño del mandato legislativo, deriven en cualquier clase de beneficio en el aspecto jubilatorio.

Por otra parte, considérase que el desempeño del cargo legislativo es una dignidad de tal jerarquía que tiene en sí mismo su más amplia compensación, que es la distinción que el pueblo confiere, muestra de confianza y de honor.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.
Juan S. Palmero. — Fernando Solá.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Derógase el último párrafo del artículo 1º de la ley 16.092, modificatoria del artículo 5º de la ley 14.514, en la parte que expresa: «Los ciudadanos que hayan desempeñado o que desempeñen representaciones legislativas nacionales podrán optar por el régimen de la presente, cualquiera fuere el tiempo de desempeño de su mandato.»

Art. 2º — Derógase el artículo 2º de la ley 16.092.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan S. Palmero. — Fernando Solá

—A la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

3

Buenos Aires, 19 de marzo de 1964

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley orgánica de los partidos políticos, en desempeño de su función constitucional de órgano colegislador y en cumplimiento de uno de los altos propósitos enunciados antes de llegar al ejercicio del gobierno. Con este acto, encara la complementación y desarrollo, con carácter orgánico y estable, del proceso institucional iniciado en la República por la ley Sáenz Peña, cuya segunda y actual etapa fue prevista por su propio inspirador cuando expresaba que el régimen electoral adoptado pretendía la formación de partidos fuertes, orgánicos y de profunda raigambre democrática.

En el mensaje con que acompañara el proyecto de ley que lleva su nombre, el 11 de agosto de 1911, el presidente Sáenz Peña afirmaba que el nuevo sistema electoral exigía, «para su buen funcionamiento, una sólida organización y una perfecta disciplina de los partidos políticos, de las cuales estamos aún muy distantes, y para las que puede ser una preparación el ensayo leal del sistema que en el proyecto se propone.»

Elección, sufragio y partidos políticos son instrumentos básicos insustituibles en la dinámica del gobierno representativo contemporáneo. Si este tipo de democracia significa el gobierno del pueblo por medio de sus representantes, la elección sólo puede hacerse a través del sufragio que permita la selección entre los candidatos previamente nominados por los partidos, en los que se canalizan y ordenan los distintos sectores de la opinión pública.

La organización constitucional más perfecta fracasará en la práctica si el sistema electoral no asegura con exactitud la auténtica expresión de la voluntad popular. Bien pudo afirmar Hipólito Yrigoyen que «la legalidad del comicio es la fuente de todo poder y la base y esencia de nuestro sistema político.»

Para lograr su efectiva vigencia, es necesario que el proceso democrático no solamente condicione la estructura y la organización del Estado y la realización de comicios limpios y correctos. Es indispensable, además, que se cumpla mediante la intervención de partidos políticos democráticos en su espíritu y en su acción, capaces de llevar a la práctica, en toda su plenitud, las complejas y delicadas funciones que le son inherentes en la dinámica republicana.

La existencia y pluralidad de los partidos políticos hacen a la esencia de la forma de gobierno adoptada por la Constitución Nacional (artículos 1º, 22 y concordantes). El derecho de los habitantes a agruparse en organizaciones partidarias, así como el de éstas a su fundación, constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento, son igualmente reconocidos y garantizados conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 14), las cuales, al hacerlo, no pueden alterar el derecho reglado (artículo 28).

Los altos propósitos que inspiran el proyecto, y a cuya efectiva realización se dirigen todas y cada una de sus disposiciones, se concretan en las siguientes bases esenciales que hacen a lo fundamental de su estructura:

I) Consolida un sistema de partidos políticos genuinamente democráticos, tanto en su doctrina como en su funcionamiento, fuertes y orgánicos, y en condiciones de cumplir su misión de verdaderos instrumentos de gobierno en forma permanente y no sólo en ocasión de cada proceso electoral.

II) Asegura una auténtica expresión de la voluntad popular en todos los aspectos de la vida interna del partido. Se da así vigencia al concepto de Matienzo, cuando decía que «no hay gobierno republicano posible si la libertad de sufragio no empieza a ser ejercida por los ciudadanos dentro de las agrupaciones políticas; es menester, pues, empezar por el principio: organizar republicanamente los partidos para organizar republicanamente la Nación.»

III) Estimula la participación ciudadana en las actividades partidarias procurando a los partidos la mayor representatividad posible y evitando que los ciudadanos se desinteresen de los problemas políticos. Como enseñaba Leandro N. Alem, «la vida política es necesaria e indispensable para un pueblo libre; la vida política que se alienta, por así decirlo, y se desenvuelve eficazmente en los partidos...», precisamente porque «son los esfuerzos, los celos y las rivalidades de los partidos los que engendran las buenas instituciones y modifican las existentes con reformas saludables, poniendo de manifiesto las riquezas latentes de un país.»

IV) Garantiza en forma amplia y efectiva los derechos y libertades partidario-electorales, tanto en lo individual del ciudadano y afiliado como en lo colectivo del partido. Inspirado en la doctrina republicana, el proyecto respeta el ámbito natural de la dinámica partidaria y se limita a establecer el mínimo de medidas consideradas necesarias para asegurar en su seno la efectiva vigencia de la democracia. Es así como, en lugar de consagrar un régimen intervencionista, se inclina por la ordenación de un adecuado sistema de garantías que tutelen en el hecho y en todos sus aspectos el libre ejercicio del derecho individual y colectivo de asociación política. Para ello se prevén los medios y recursos idóneos a fin de asegurar la plenitud de sus derechos a afiliados, autoridades partidarias, candidatos y ciudadanos en general. Dentro de ese concepto, toda la economía del proyecto se dirige a garantizar la democracia y libertad externas e internas de los partidos.

V) Impone el ajuste de las actividades y conducta del partido, autoridades, candidatos y afiliados con las reglas de su carta orgánica y la efectiva concordancia en la realidad con su doctrina política contenida en la declaración de principios, el programa y las bases de acción política.

VI) Crea el fondo partidario permanente con la finalidad de dotar a los partidos reconocidos de los medios económicos y financieros necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales. Al mismo

propósito concurren las franquicias y exenciones fiscales que consagra. Correlativamente, se establece un adecuado control del origen, destino y manejo de los fondos partidarios.

VII) Respetar la soberanía partidaria, llevando al mínimo —pero con la máxima eficacia jurídica— la actuación estatal. Esta se realiza a través del Poder Judicial, con un fuero especializado compuesto por magistrados que gozan de la independencia que la Constitución Nacional asegura a los miembros de ese poder, y con todas las seguridades del debido proceso legal.

Con estas disposiciones se procura encauzar y facilitar la formación y el libre desenvolvimiento de las distintas corrientes de opinión que corresponden a la actual realidad política, acentuando —mediante la integración social de los partidos— el ordenado progreso de nuestras prácticas democráticas.

Excluido todo sentido de oportunidad, se propone un instrumento jurídico elaborado para servir como elemento permanente de la vida institucional de la Nación, y no como un medio ocasional de lucha política.

Invierte en definitiva la fuerza de una decisión fundamental, por la que devuelve al pueblo el ejercicio de su soberanía, para que pueda realizar plenamente su voluntad emancipadora.

Para ello, se ha tenido en cuenta el abundante material que provee la doctrina, la legislación y la jurisprudencia del país y del extranjero. Pero por sobre todo, se ha atendido preferentemente a la realidad y a las posibilidades de nuestras instituciones. Se ha procurado así reunir, en una estructura sistemática, disposiciones capaces de reglar en forma perdurable la organización y funcionamiento de los partidos políticos, evitando la formulación de normas de contenido meramente teórico o académico, de difícil si no imposible aplicación.

El texto definitivo, por otra parte, ha sido redactado luego de un proceso de amplio debate con los representantes de las agrupaciones partidarias, en el que fueron consideradas las observaciones expuestas, muchas de las cuales han sido incorporadas al proyecto.

El Poder Ejecutivo ha considerado necesaria la ordenación jurídica de los partidos políticos en esta oportunidad, para que su discusión se realice con la serenidad de criterio que asegura la lejanía de toda contienda electoral, siguiendo la directiva ética de Hipólito Yrigoyen: «No se debe buscar el afianzamiento del derecho público con una exigencia partidaria, sino por su propio concepto y como condición absoluta para el constante desenvolvimiento de la Nación».

El Poder Ejecutivo confía, por consiguiente, que el adjunto proyecto de ley orgánica, al ser sancionado por vuestra honorabilidad, constituirá el instrumento jurídico adecuado que asegure a los partidos políticos el libre y efectivo ejercicio de sus atributos, derechos, poderes y libertades, a la vez que el fiel cumplimiento de sus deberes. Para ello aspira a que el Honorable Congreso, sin perjuicio de lo que en función de su potestad constitucional pueda resolver en definitiva, mantenga su estructura orgánica, ya que todos sus preceptos responden a un sistema y método armónicos, y están estrechamente correlacionados entre sí.

Con esta iniciativa, inspirada en claras actitudes políticas que avalan una conducta y responden a una programática largamente sostenida, prescindiendo de parcialidades y con absoluta buena fe, el Poder

Ejecutivo quiere contribuir al perfeccionamiento de nuestras instituciones, reafirmando el sagrado principio del acatamiento de la soberanía popular. Por eso, este proyecto tiende a asegurar que los partidos políticos puedan llenar los altos fines que les incumben como instrumentos del gobierno representativo instituido por la Constitución Nacional, en un régimen de auténtica democracia en el que participen todos los sectores de la opinión pública.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.
Juan S. Palmero.

PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS

TITULO I

Principios generales

CAPÍTULO UNICO

Derecho individual y colectivo de asociación política.

Artículo 1º — 1. Se garantiza a los ciudadanos el derecho de asociación política, reconocido por la Constitución Nacional, para agruparse en partidos políticos democráticos.

2. Se garantiza a los partidos el derecho a su fundación, constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política, para actuar en uno o varios distritos electorales, o en todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las condiciones y los requisitos que establece la presente ley orgánica.

Formulación y realización de la política nacional y nominación de candidatos.

Art. 2º — Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y la realización de la política nacional y les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos.

Condiciones para la existencia de los partidos.

Art. 3º — 1. La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

- a) Grupo humano, integrado por un número representativo de ciudadanos, unidos por un vínculo permanente;
- b) Doctrina política que en la determinación de la política nacional promueva el bien público, a la vez que propugne expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo, republicano y federal, y al de los principios y los fines de la Constitución Nacional;
- c) Organización estable y funcionamiento reglado por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de las autoridades y los organismos partidarios y de los candidatos, asegurando la representación de las minorías;
- d) Reconocimiento judicial de su personalidad jurídico-política como partido, a los efectos de su existencia legal, la que comporta su inscripción en el registro público correspondiente.

2. Violan las condiciones exigidas por los incisos b) y c), los partidos que, por su doctrina política, o por su actuación, aúspicien en forma directa o indirecta, o lleven a la práctica, inclusive en su organización y vida internas, cualquiera de las condiciones o características inherentes a los regímenes autocráticos o totalitarios.

Personalidad jurídico-política y personalidad jurídica de derecho privado.

Art. 4º— Los partidos reconocidos, además de su personalidad jurídico-política, son personas jurídicas de derecho privado; en cuyo carácter pueden adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con el Código Civil y las disposiciones de la presente ley orgánica.

Ley de orden público
Ambito de aplicación.

Art. 5º— 1. La presente ley orgánica es de orden público.

2. Se aplica a los partidos que intervienen en la elección de las autoridades del gobierno nacional y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

La justicia nacional electoral integra el Poder Judicial de la Nación (Constitución Nacional, art. 91)

Art. 6º— 1. La justicia nacional electoral integra el Poder Judicial de la Nación, como un fuero especializado en materia jurídico-política, partidaria y electoral, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Nacional, ley 13.998, y decreto ley 1785/58 a cuyos artículos 1º, 32 inciso 2 y 49 está incorporada.

Jurisdicción y competencia.

2. Corresponde a la justicia nacional electoral, además de la jurisdicción y competencia que le atribuye la ley orgánica respectiva, el control de la vigencia efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros, que la presente ley orgánica y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

Normas legales derogadas y vigentes.

Art. 7º— 1. Quedan derogados el decreto ley 12.530/62 y las demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley orgánica.

2. Quedan en vigencia los decretos leyes 4.311/57 (t.o.), 7.163/62, 8.163/62, 13.053/62 y 6.407/63.

TITULO II

De la fundación y constitución

CAPÍTULO PRIMERO

Requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídico-política

1) Partidos de distrito.

Requisitos.

Art. 8º— Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personalidad jurídico-política co-

mo partido debe solicitarla ante el juez nacional electoral del distrito, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Presentar acta de fundación y constitución, que acredite la adhesión de un número de electores no inferior al 0,4 % del total de los inscritos en el registro electoral del distrito correspondiente hasta un máximo de un millón y sin computar el excedente, o a quinientos si de aquel porcentaje resultare una cifra menor; este acuerdo de voluntades se complementa con un documento en el que conste nombre, domicilio, número de cédula de identidad y matrícula de los firmantes;
- b) Nombre; adoptado por la asamblea de fundación y constitución;
- c) Declaración de principios y programa y/o bases de acción política; sancionados por la asamblea de fundación y constitución;
- d) Carta orgánica; sancionada por la asamblea de fundación y constitución;
- e) Acta de designación de las autoridades promotoras, las que convocarán a elecciones para constituir las autoridades definitivas del partido, conforme con la carta orgánica y dentro del plazo de tres meses; el acta de la elección de las autoridades definitivas debe remitirse al juez nacional electoral;
- f) Denunciar domicilio partidario y presentar acta de designación de los apoderados;
- g) Presentar al juez nacional electoral los libros a que se refiere el artículo 44, dentro de los dos meses de obtenido el reconocimiento.

Requisitos.

2) Partidos nacionales.

Art. 9º— 1. Los partidos nacionales están integrados por varios partidos de distrito unidos por un vínculo permanente.

2. Los partidos de distrito reconocidos y aquellos que deseen actuar en dos o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa y/o bases de acción política y carta orgánica, como partidos nacionales, deben solicitar su reconocimiento como tales ante el juez nacional electoral del distrito de su fundación, cumpliendo con lo determinado por el artículo 8º.

3. Obtenido el reconocimiento, dichos partidos deben inscribirse en el registro correspondiente, ante los jueces nacionales electorales de los distritos donde deseen actuar, a cuyo efecto, además de lo preceptuado por el artículo 8º, en su caso, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Testimonio de la resolución que les reconoce personalidad jurídico-política, los autoriza a funcionar y en qué carácter;
- b) Declaración de principios, programa y/o bases de acción política y carta orgánica nacionales;
- c) Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las autoridades de distrito;
- d) Denunciar domicilio partidario central y presentar acta de designación de los apoderados.

Distrito de fundación.

Art. 10.— 1. A los efectos del artículo anterior, se considera distrito de la fundación aquel donde se han practicado los actos originarios y de la constitución del partido.

2. En el caso de los partidos que hayan obtenido cualquier reconocimiento anterior en el ámbito nacional, el distrito de la fundación es el de esa sede judicial, mientras subsista la voluntad de mantenerlo y una sentencia definitiva no establezca otro distinto.

3) Partidos confederados.

Requisitos.

Art. 11. — 1. La presente ley orgánica se aplica a la constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de las confederaciones de partidos nacionales y/o de distintos distritos ya reconocidos.

2. El reconocimiento de las confederaciones debe ser solicitado al juez nacional electoral del lugar del domicilio, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Especificación de los partidos que se confederan y justificación de la voluntad de integrar la confederación con carácter permanente, expresada por medio de los órganos partidarios competentes;
- Testimonio de la resolución de la justicia nacional electoral que reconoce personalidad a cada uno de los partidos que se confederan;
- Nombre de la confederación; adoptado en el acto de voluntad que integra la unión;
- Declaración de principios, programa y/o bases de acción política y carta orgánica de cada partido;
- Nómina de las autoridades de cada partido;
- Declaración de principios, programa y/o bases de acción política y carta orgánica de la confederación;
- Acta de elección de las autoridades y designación de apoderados de la confederación;
- Domicilio central de la confederación.

Reconocimiento.

Art. 12. — 1. Los partidos de distrito, nacionales o confederados, deben solicitar su reconocimiento, hasta tres meses antes de la fecha de la elección, ante el juez nacional electoral del distrito de la fundación o del domicilio principal, según el caso, sin perjuicio de solicitar el reconocimiento en los distritos en que actúen, dentro del mismo término.

2. Los partidos, para tener derecho a urgir ese reconocimiento y el pronunciamiento del juez nacional electoral sobre el acto del registro de las candidaturas, deben justificar su diligencia y el cumplimiento de todas las condiciones y requisitos legales, con anterioridad al día del vencimiento del referido plazo de la legislación electoral.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del nombre

Derecho al nombre, su registro y uso, cambio o modificación.

Art. 13. — 1. Se garantiza a los partidos el derecho a un nombre, su registro y su uso.

2. El nombre debe ser adoptado en los actos de la fundación y la constitución del partido, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación.

3. La denominación *partido*, únicamente puede ser utilizada por los partidos en constitución y reconocidos, así como también por los partidos a los cuales les haya sido cancelada su personalidad jurídico-política.

4. El nombre no debe contener designaciones personales, ni derivados de ellas, ni provocar confusión material o ideológica, y debe distinguirse razonablemente del nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

5. En el futuro, la denominación de los partidos no puede formarse mediante aditamento o supresión de vocablos correspondientes a los nombres de partidos reconocidos, ni usarse los vocablos argentino, nacional o internacional o sus derivados, o vocablos cuyo significado afecte o pueda afectar las relaciones internacionales de la Nación, o implicar antagonismo de razas o religiones, ni que contravengan otras disposiciones de la presente ley orgánica.

Exclusividad del nombre.

Art. 14. — 1. El nombre de un partido de distrito, nacional o confederado, legalmente constituido es un atributo exclusivo inherente, y no puede ser usado por ningún otro partido, asociación, agrupación o entidad de cualquier naturaleza en todo el territorio de la Nación.

2. Cuando una persona, un grupo de personas, un partido, una asociación o una entidad de cualquier naturaleza, use indebidamente el nombre registrado de un partido reconocido incurre en usurpación del mismo, y la justicia nacional electoral decide al cese inmediato del uso indebido del nombre, disponiendo el empleo de la fuerza pública para su cumplimiento.

3. Cuando un partido es declarado extinguido su nombre no puede ser usado por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurridos seis años de la sentencia firme que declara la extinción del partido.

Aprobación, cambio y modificación del nombre.

Art. 15. — 1. El nombre partidario, su cambio o su modificación deben ser aprobados por la justicia nacional electoral; la que verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y lleva un registro al efecto.

2. Solicitado el reconocimiento del derecho al nombre adoptado, el juez nacional electoral dispone la publicación por tres días en el Boletín Oficial de la Nación de los vocablos que integran la denominación, así como la fecha en que fue adoptada, al efecto de la oposición que pueda formular otro partido o el procurador fiscal.

Control y oposición a la concesión del derecho al nombre.

3. Los partidos reconocidos o en constitución de cada distrito y en el orden nacional, están habilitados para controlar y oponerse al reconocimiento del derecho al nombre, con anterioridad a que el juez nacional electoral resuelva en definitiva y en el acto de la audiencia establecida en la presente ley orgánica, con cuya comparecencia tienen el derecho de apelar; sin perjuicio del ejercicio ulterior de las acciones pertinentes.

CAPÍTULO TERCERO

Del domicilio

Domicilio partidario.

Art. 16. — 1. Los partidos deben, a los efectos de la presente ley orgánica, constituir domicilio en la ciudad capital correspondiente al distrito en que

soliciten el reconocimiento de su personalidad jurídico-política. Así mismo, deben denunciar los domicilios partidarios central y local.

2. Los partidos nacionales y los confederados deben constituir domicilio en la Capital Federal.

Domicilio electoral del ciudadano.

Art. 17. — 1. El domicilio electoral del ciudadano es el último anotado en la libreta de enrolamiento o cívica.

2. Dicho domicilio es el único válido a los efectos militares y electorales para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes políticos, así como para determinar la residencia inmediata exigida por los artículos 40 y 47 de la Constitución Nacional.

TITULO III

De la doctrina y organización

CAPÍTULO PRIMERO

De la declaración de principios, programa y/o bases de acción política

Principios que deben propugnar.

Art. 18. — 1. La declaración de principios, el programa y/o bases de acción política, deben propugnar expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo, republicano y federal, basado en el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales del hombre, la división de los poderes gubernativos, la legalidad o imperio de la ley, la pluralidad de partidos, la indestructibilidad y la autonomía de las provincias y el mantenimiento del régimen municipal; así como también el sostenimiento de los principios y los fines de la Constitución Nacional, con exclusión de toda sujeción o dependencia de personas, autoridades u organizaciones extranjeras.

2. Los partidos acatan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas.

Regímenes y partidos autocráticos o totalitarios.

Art. 19. — 1. No cumplen con las condiciones exigidas por el artículo anterior los partidos que, en su doctrina política o en cualquier aspecto de su funcionamiento, auspicien o realicen, en forma directa o indirecta, inclusive en su organización y vida interna, cualquiera de las características inherentes a los regímenes autocrático o totalitario.

2. A los efectos de la presente ley orgánica se considera régimen autocrático, por oposición al democrático, a aquel en el que el ejercicio de la autoridad se manifiesta en el desconocimiento de los derechos humanos y de sus garantías; la concentración del poder gubernativo; la fuerza, la ilegalidad, el partido único, las facultades extraordinarias o la suma del poder público en el sentido contemplado por el artículo 29 de la Constitución Nacional; el apoyo o el elogio de regímenes o partidos autocráticos y/o totalitarios presentes o pasados; el antagonismo de razas o religiones y, en general, en modalidades que no encuadren en los principios inherentes al régimen democrático, representativo y republicano de gobierno adoptado por la Constitución Nacional.

3. A los mismos efectos, se considera régimen totalitario, por oposición al inherente al estado de de-

recho, a aquel que concentra el poder estatal y absorbe políticamente la vida de los individuos en la totalidad o mayor parte de sus aspectos.

Aprobación y modificación.

Art. 20. — La declaración de principios, el programa y/o bases de acción política, así como todo cambio o modificación de los mismos, son sancionados por los órganos deliberativos del partido y deben ser aprobados por la justicia nacional electoral; la que verifica su conformidad con la Constitución Nacional, la presente ley orgánica y demás disposiciones legales sobre la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la carta orgánica

Principios a que obedecen.

Art. 21. — La carta orgánica regula la organización y el funcionamiento del partido conforme con los siguientes principios:

- a) Gobierno y administración, distribuidos en órganos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios; las convenciones, congresos o asambleas generales son los órganos de jerarquía superior del partido;
- b) Sanción por los órganos deliberativos del partido de la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política;
- c) Libertad de afiliación, y apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año, durante el término mínimo de cuarenta días hábiles y anunciado con dos meses de anticipación; la carta orgánica debe asegurar el debido proceso partidario en toda cuestión vinculada con la libertad de afiliación;
- d) Participación y control de los afiliados en el gobierno y la administración del partido; y elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos por el voto obligatorio, secreto y directo de los afiliados con representación de las minorías; la carta orgánica puede establecer en los distritos el voto directo por circunscripciones, secciones o departamentos;
- e) Determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y control de acuerdo con las disposiciones de la presente ley orgánica;
- f) Determinación de las causas y la forma de extinción del partido.

Supremacía de la carta orgánica.

Art. 22. — 1. La carta orgánica constituye la ley fundamental y suprema del partido, en cuyo carácter rige los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias, y a la cual sus autoridades y afiliados deben ajustar obligatoriamente su actuación.

2. Los organismos partidarios pueden regir la actividad interna del partido mediante la sanción de reglamentos, para su gobierno y administración; resoluciones que deben dictarse en consecuencia y de conformidad con la carta orgánica.

Aprobación y modificación.

Art. 23. — La carta orgánica y sus modificaciones tienen que ser sancionadas por los órganos deliberativos del partido y aprobadas por la justicia nacional

electoral; la que verifica su conformidad con la Constitución Nacional, la presente ley orgánica y las demás disposiciones legales sobre la materia.

Justificación de la documentación.

Art. 24. — La justificación de la documentación exigida en los títulos II y III de la presente ley orgánica y sus modificaciones, se cumplimenta mediante testimonio o copia autenticada por escribano público, sin perjuicio de que pueda ser requerida la documentación original.

TÍTULO IV

Del funcionamiento o dinámica de los partidos

CAPÍTULO PRIMERO

De la conformidad con la carta orgánica y doctrina política

Ajuste de las actividades partidarias con la carta orgánica y su concordancia en la realidad con la doctrina política del partido.

Art. 25. — 1. La actividad del partido, sus autoridades, candidatos y afiliados deben ajustarse a las prescripciones de la carta orgánica y concordar en la realidad con su doctrina política, contenida en la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política.

2. Esta norma debe ser tenida especialmente en cuenta para verificar el cumplimiento de lo determinado por los artículos 3º, 18, 19, 65 y 66.

Conducta de los afiliados.

3. La concordancia requerida por el presente artículo no queda afectada por la sola y exclusiva actividad de uno o varios afiliados, siempre que las autoridades competentes del partido aclaren en forma fehaciente la posición doctrinaria y activa del mismo. En dicho caso, para determinar la conducta partidaria, la justicia nacional electoral debe dar traslado del incidente al partido, antes de dictar resolución al respecto, a fin de que aquél expresamente ratifique o rectifique los actos o hechos de los afiliados que puedan comprometerlo, imprimiéndole el procedimiento reglado en el título VIII, capítulo tercero.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la afiliación

Libertad de afiliación.

Art. 26. — Se garantiza la libertad y afiliación a los partidos de acuerdo con las disposiciones legales y sus respectivas cartas orgánicas, mediante los recursos conducentes a dicha finalidad.

Requisitos para ser afiliados.

Art. 27. — Para ser afiliado a un partido, se requiere:

- a) Ser elector inscrito en el registro electoral del distrito en que quiere afiliarse;
- b) Comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento o la libreta cívica;
- c) Presentar por cuadruplicado una ficha-solicitud que contenga: nombre y domicilio, estado

civil, profesión u oficio y la firma auténtica o impresión digital, cuya autenticidad debe ser certificada en forma fehaciente por el funcionario público competente o por la autoridad partidaria que determina la carta orgánica, cuya nómina debe ser remitida a la justicia nacional electoral; la afiliación puede también ser solicitada por intermedio de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe de la misma certifica la autenticidad de la firma o impresión digital;

d) Abonar la cuota partidaria.

Quiénes no pueden ser afiliados.

Art. 28. — No pueden ser afiliados:

- a) Los excluidos del registro electoral por virtud de las disposiciones legales vigentes;
- b) Los afiliados a otro partido;
- c) El personal superior y subalterno de las fuerzas armadas de la Nación en actividad, y situación de retiro cuando hayan sido llamados a prestar servicio;
- d) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias y sus equivalentes en actividad, o jubilados llamados a prestar servicio;
- e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Los ciudadanos que infrinjan estas prohibiciones, incurrir en inhabilitación para poder elegir y ser elegidos, inclusive en las elecciones partidarias internas, y para desempeñar cargos públicos por el término de seis años.

Adquisición de la afiliación.

Art. 29. — 1. La calidad de afiliados se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueben la solicitud respectiva. Una ficha de afiliación se entrega al interesado, otra es conservada por el partido y las dos restantes se remiten a la justicia nacional electoral.

Extinción de la afiliación.

2 La afiliación se extingue por renuncia presentada al partido o a la justicia nacional electoral, por expulsión, por fallecimiento y por la violación de lo dispuesto en los artículos 27 y 28.

3 El partido comunica al juez nacional electoral la resolución que declara extinguida la afiliación, y este último comunica a aquél la renuncia que se haya presentado, en ambos casos dentro del término de un mes.

Registro de afiliados.

Art. 30. — 1. El registro de afiliados está constituido por la ordenación actualizada de las fichas de afiliación a que se refieren los artículos anteriores, el cual es llevado y fiscalizado por la justicia nacional electoral.

2. Además, cada partido lleva un registro de afiliados sobre la base de la ficha de afiliación que conserva.

Padrón partidario.

Art. 31. — 1. El padrón partidario es público. Actualizado y autenticado, debe ser remitido al juez nacional electoral hasta el primero de diciembre de cada año, antes de cada elección interna y cuando el juez lo requiera.

Control de la justicia
nacional electoral

2. La justicia nacional electoral fiscaliza y aprueba el registro y padrón de afiliados.

CAPÍTULO PRIMERO

Elecciones partidarias internas

Régimen electoral par-
tidario.

Art. 32. — Los partidos cumplen con el método democrático en su vida interna, a través de elecciones periódicas para la nominación de autoridades y candidatos, mediante el voto obligatorio, secreto y directo de los afiliados con representación de las minorías. Pueden establecer en los distritos el voto directo por circunscripciones o secciones.

Normas que rigen las
elecciones internas

Art. 33. — Las elecciones partidarias internas se rigen por la presente ley orgánica, la carta orgánica y subsidiariamente, en lo que sea aplicable, por la legislación electoral.

Veedores de la jus-
ticia nacional electoral.

Art. 34. — La justicia nacional electoral puede nombrar veedores de los actos electorales partidarios de oficio, y debe hacerlo a pedido de parte interesada.

Publicidad del padrón
de afiliados.

Art. 35. — El padrón de afiliados se debe remitir al juez nacional electoral, quince días antes de la fecha del comicio interno, y ser exhibido el día de la elección, en los locales partidarios donde se emita el voto.

Publicidad de las elec-
ciones partidarias

Art. 36. — El resultado de las elecciones partidarias internas debe tener publicidad y ser comunicado al juez nacional electoral.

Los candidatos deben
ser afiliados.

Art. 37. — Los candidatos a cargos públicos electivos, deben ser afiliados del partido con la antigüedad mínima de un año, salvo el partido que tenga una existencia menor.

Quiénes no pueden
ser candidatos.

Art. 38. — No pueden ser candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

- Los excluidos del registro electoral por virtud de las disposiciones legales vigentes;
- El personal superior y subalterno de las fuerzas armadas de la Nación en actividad, y situación de retiro cuando hayan sido llamados a prestar servicios;
- El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias y sus equivalentes en actividad, o jubilados llamados a prestar servicios;
- Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial;
- Quiénes desempeñen cargos directivos o sean apoderados en empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar o fuentes de energía.

Plataforma electoral.

Art. 39. — 1. Con anterioridad a la elección de los candidatos a diputados nacionales y concejales, los organismos partidarios competentes deben aprobar una plataforma electoral o ratificar la plataforma vigente, de acuerdo con la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política, la que comporta mandato del partido para los electos.

2. Copia de esta plataforma electoral, así como la aceptación de las candidaturas por los candidatos, deben ser presentados al juez nacional electoral en oportunidad de la oficialización de las listas de candidatos contempladas por la legislación electoral.

3. La plataforma electoral debe tener la debida publicidad.

Art. 40. — El ciudadano que en una elección partidaria interna suplante a otro sufragante, o vote más de una vez en la misma elección, o sufrague fuera de su domicilio electoral, o de cualquiera otra manera emita su voto sin derecho, incurre en inhabilitación para elegir y ser elegido, inclusive en las elecciones partidarias internas y para el desempeño de cargos públicos por seis años.

CAPÍTULO CUARTO

De la titularidad de los derechos y poderes partidarios

Garantía a las auto-
ridades vigentes.

Art. 41. — Se garantiza a las autoridades vigentes el uso del nombre partidario, el ejercicio de las funciones de gobierno y administración del partido, y en general el desempeño de todas las actividades inherentes al mismo, de conformidad con la presente ley orgánica, demás disposiciones legales sobre la materia y la carta orgánica del partido.

Bienes, símbolos, em-
blemas, libros y docu-
mentación partidarios.

Art. 42. — La titularidad de los derechos y poderes partidarios, reglada en el artículo anterior, determina como consecuencia el destino legal de los bienes, símbolos, emblemas, libros y documentación del partido.

Derechos de secesión
y de intervención

Art. 43. — 1. Los partidos confederados tienen el derecho de secesión, y pueden denunciar el acuerdo que los confedera. En cambio, sus organismos centrales carecen del derecho de intervención.

2. En los partidos nacionales, los partidos de distrito carecen del derecho de secesión. En cambio, los organismos centrales competentes tienen el derecho de intervención a los distritos.

CAPÍTULO QUINTO

De los libros y documentos partidarios

Art. 44. — Sin perjuicio de los libros y documentos que prescribe la carta orgánica, los partidos, por intermedio de cada comité nacional y comité central de distrito, deben llevar en forma regular los siguientes libros y documentos, rubricados y sellados por el juez nacional electoral correspondiente, con indicación de la filial o comité a que pertenecen:

- Libro de registro de afiliados, donde conste el nombre de los ciudadanos inscriptos, firma, domicilio, número de matrícula individual, clase y ocupación; las firmas pueden constar en

fichas de afiliación, inclusive a los efectos del artículo 8º, inciso a);

- b) Libro de inventario;
- c) Libro de caja, debiendo conservarse la documentación complementaria correspondiente;
- d) Libro de actas y resoluciones.

CAPÍTULO SEXTO

De la propaganda y proselitismo partidarios

Libertad de propaganda y proselitismo.

Art. 45. — 1. Se garantiza la libertad de propaganda y proselitismo partidarios, dentro de la letra y el espíritu de la presente ley orgánica y demás disposiciones legales aplicables.

2. La propaganda y el proselitismo, en cuanto táctica y estrategia partidaria, están determinados por la doctrina política contenida en la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política.

Límites.

Art. 46. — A los fines de la propaganda y proselitismo partidarios, no pueden utilizarse expresiones verbales o escritas contrarias al orden o a la moral públicas, ni a religión alguna, ni que auspicien, directa o indirectamente, el establecimiento de cualquier régimen autocrático o totalitario, o antagonismos de razas o religiones, ni que sean ofensivas contra la Nación, sus símbolos e instituciones.

Utilización de bienes particulares.

Art. 47. — 1. No pueden ser utilizados para la propaganda y el proselitismo partidarios los lugares, edificios y en general bienes del dominio privado de los particulares, en la Capital Federal y en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva de la Nación, sin el consentimiento escrito del propietario.

Lugares públicos.

2. A los fines antes indicados, tampoco pueden ser utilizados las calzadas de las calles públicas, sus veredas y cordones, así como los monumentos y las obras de arte, en la Capital Federal y en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva de la Nación: como ni los pavimentos, cordones, veredas y obras de arte en los caminos de jurisdicción nacional.

Destrucción o alteración de medios de propaganda.

Art. 48. — Los carteles, avisos y, en general, todo medio de propaganda y proselitismo partidarios, fijados en lugares, edificios y bienes de acuerdo con la presente ley orgánica y demás disposiciones legales aplicables, no pueden ser destruidos, alterados o superpuestos por otros.

Destrucción de la propaganda ilegal

Art. 49. — La justicia nacional electoral, por el conocimiento directo o por denuncia, puede ordenar la destrucción de los medios de propaganda y proselitismo utilizados en contravención con las disposiciones legales.

CAPÍTULO SÉPTIMO

De los símbolos y emblemas partidarios

Art. 50. — Se garantiza a los partidos reconocidos el derecho al registro y al uso exclusivo de sus sím-

bolos y emblemas, los cuales no pueden ser usados por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

Art. 51. — El ejercicio del derecho al registro y al uso exclusivo de los símbolos y emblemas partidarios se rige por las disposiciones contenidas en el título II, capítulo segundo, de la presente ley orgánica, en lo que sean aplicables.

CAPÍTULO OCTAVO

Del registro de los actos que hacen a la existencia partidaria

Art. 52. — 1. La Cámara Nacional Electoral y los juzgados de distrito llevan un registro público a cargo de sus respectivos secretarios, donde deben inscribirse:

- a) Los partidos reconocidos y la ratificación de los partidos preexistentes;
- b) El nombre partidario, sus cambios y modificaciones;
- c) Los símbolos y emblemas partidarios que se registren;
- d) La cancelación de la personalidad jurídico-política partidaria;
- e) La extinción y la disolución partidarias.

2. Todo movimiento en las inscripciones cambios o modificaciones son comunicados inmediatamente por los juzgados de distrito a la Cámara Nacional Electoral para la actualización del registro a su cargo.

TÍTULO V

Del patrimonio del partido

CAPÍTULO PRIMERO

De los bienes y recursos

Elementos que integran el patrimonio partidario.

Art. 53. — El patrimonio del partido se integra con los bienes y recursos que autoriza la carta orgánica y que no prohíbe la presente ley orgánica u otras disposiciones legales.

Recursos prohibidos.

Art. 54. — Los partidos no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente:

- a) Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes pueden imponer cargo de que su nombre no se divulgue; pero los partidos deben conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la donación;
- b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o provinciales; o de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas, o de empresas que exploten juegos de azar o fuentes de energía; o de procedencia extranjera; o de proveedores de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas y descentralizadas;
- c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales;
- d) Contribuciones o donaciones de personas que se encuentran en situación de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando hayan sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o empleadores.

Sanciones por contribuciones prohibidas.

Art. 55. — 1. Los partidos que contravengan las prohibiciones establecidas en el artículo anterior incurrir en multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución ilícitamente aceptada.

2. La persona de existencia ideal que efectúe las contribuciones o donaciones prohibidas en el artículo anterior incurrir en multa equivalente al décuplo del monto de la donación o contribución ilegítimamente reauzada, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a sus directores, gerentes, representantes o agentes.

3. Las personas físicas que se enumeran a continuación incurrir en inhabilitación para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones públicas y las elecciones partidarias internas, a la vez que inhabilitación para el desempeño de cargos públicos de dos a seis años, y multa de cincuenta mil a un millón de pesos o, en defecto de esta última, prisión de seis meses a dos años:

- a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones contempladas en el artículo 55 y, en general, todas las personas que contravengan lo allí dispuesto;
- b) Los afiliados que, por sí o por interpósita persona, acepten o reciban a sabiendas donaciones o aportes para el partido, de las personas mencionadas en el inciso precedente, así como los afiliados que, por sí o por interpósita persona soliciten a sabiendas, de aquéllos, donaciones o aportes para el partido o acepten o reciban donaciones anónimas, en contra de lo prescrito por el artículo 54;
- a) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervengan directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus inferiores jerárquicos o empleados para un partido, así como los afiliados que, a sabiendas acepten o reciban para el partido contribuciones o donaciones así obtenidos;
- d) Los que utilicen, directa o indirectamente, fondos de un partido para influir en la nominación de cualquier persona en una elección partidaria interna.

Destino de multas.

Art. 56. — Todas las multas que se apliquen en virtud de las disposiciones anteriores, ingresan al fondo partidario permanente.

Depósito de los fondos partidarios.

Art. 57. — Los fondos del partido deben depositarse en una cuenta especial, en el Banco de la Nación Argentina u otros bancos oficiales, a nombre del partido y a la orden de las autoridades que determine la carta orgánica.

Adquisiciones o locación de inmuebles.

Art. 58. — Los bienes inmuebles adquiridos o locales con fondos partidarios, o que provengan de donaciones efectuadas con tal objeto, deben serlo a nombre del partido.

Exención de contribuciones.

Art. 59. — 1. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos, están exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras.

2. Esta exención alcanza a los bienes inmuebles que no estén a nombre del partido, siempre que se

encuentren afectados, en forma fehaciente, exclusiva y habitual, a las actividades específicas del mismo.

3. La exención alcanza a los bienes de renta del partido, siempre que ésta sea invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acreciente, directa o indirectamente, el patrimonio de persona alguna; así como también a las donaciones en favor del partido y el papel destinado a uso exclusivo del mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del fondo partidario permanente y de los subsidios y franquicias

Carácter y finalidad del fondo partidario permanente.

Art. 60. — 1. Créase el fondo partidario permanente, con la finalidad de proveer a los partidos reconocidos, en cuanto instrumentos necesarios para la determinación de la política nacional, según lo establece el artículo 2º de la presente ley orgánica, de los medios económico-financieros que contribuyan a facilitarles el cumplimiento de sus funciones institucionales.

2. La ley general de presupuesto determinará, con carácter permanente, la afectación de los recursos necesarios al fin antes indicado, bajo el rubro de fondo partidario permanente.

3. El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior, dispone de dicho fondo, a los efectos que determina la presente ley orgánica y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Aportes y franquicias a los partidos.

Art. 61. — Incorpóranse a la presente ley orgánica las disposiciones de la ley 15.793, con las modificaciones introducidas por los decretos leyes 2.390/63 y 3.284/63, sobre subsidios y franquicias a los partidos, a los que se atribuye carácter permanente.

CAPÍTULO TERCERO

Del control patrimonial

Cuentas y documentos.

Art. 62. — Los partidos deben, por el órgano que determine la carta orgánica:

- a) Llevar contabilidad detallada de todo ingreso o egreso de fondos o especie, con indicación de la fecha de los mismos y de los nombres y domicilios de las respectivas personas que los hubiesen ingresado o recibido; esta contabilidad debe conservarse durante diez ejercicios con todos sus comprobantes;
- b) Dentro de los sesenta días de finalizado cada ejercicio, deben presentar al juez nacional electoral correspondiente un estado anual de su patrimonio y una cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificando ambos estados contables un contador público nacional o los órganos de control del partido;
- c) Dentro de los sesenta días de celebrado el acto electoral nacional en que haya participado el partido, éste debe presentar al juez nacional electoral correspondiente una cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral y los que individualmente hayan realizado sus candidatos y autoridades.

Publicidad de cuentas
y documentos.

Art. 63. — 1. Las cuentas y documentos a que se refiere el artículo anterior deben estar en la secretaría del juez nacional electoral competente, para reconocimiento de los interesados, durante treinta días hábiles.

2. Si dentro de los cinco días hábiles de vencido dicho término no se hacen observaciones, el juez ordena el archivo de las cuentas. Si se formulan observaciones por violación de las disposiciones legales o de la carta orgánica, el juez resuelve y en su caso aplica las sanciones correspondientes; lo que puede hacer también de oficio.

3. Los estados anuales de las organizaciones partidarias en el distrito y en el orden nacional, deben publicarse, por un día, en el Boletín Oficial.

TITULO VI

De la caducidad y la extinción de los partidos

Efectos de la caducidad
y extinción.

Art. 64. — 1. La caducidad da lugar a la cancelación de la inscripción del partido en el registro y la pérdida de la personalidad jurídico-política a los efectos de participar en el proceso electoral, subsistiendo aquél como persona de derecho privado.

2. La extinción pone fin a la existencia legal del partido y da lugar a su disolución.

Causas de la caducidad.

Art. 65. — Son causas de la caducidad de la personalidad jurídico-política de los partidos:

- a) La no realización de elecciones partidarias internas en el término de tres años;
- b) La no presentación en distrito alguno en tres elecciones consecutivas sin causa debidamente justificada;
- c) No obtener el 3 por ciento de los votos totales válidos en distrito alguno en la elección anterior;
- d) Que la actividad del partido y sus autoridades no se ajusten a las prescripciones de la carta orgánica;
- e) La violación de lo determinado en los artículos 8º, incisos e) y g) y 44 de la presente ley orgánica.

Art. 66. — Los partidos se extinguen:

- a) Por las causas que determine la carta orgánica;
- b) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgánica;
- c) Cuando la actividad del partido, sus autoridades, candidatos y afiliados no concuerden en la realidad con la doctrina política de aquél, contenida en la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política, auspiciando o realizando en forma directa o indirecta, inclusive en su organización y vida internas, cualquiera de las condiciones o características inherentes a los regímenes autocrático o totalitario, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º, parágrafo 2, 18 y 19;
- d) Por impartir instrucción militar a los afiliados u organizarlos militarmente, o, con el mismo fin, adoptar el uso de saludos o divisas espe-

ciales o uniformes —indumentaria total o parcial—, símbolos o emblemas que exterioricen esa forma de adhesión partidaria.

Declaración de caducidad
y la extinción.

Art. 67. — La cancelación de la personalidad jurídico-política y la extinción de los partidos, son declaradas por sentencia de la justicia nacional electoral, con todas las garantías del debido procedimiento legal, en el que el partido es parte.

Solicitud de nueva
personalidad en caso
de caducidad.

Art. 68. — 1. En caso de declararse la caducidad de la personalidad de un partido reconocido, en virtud de las causas establecidas en la presente ley orgánica, previa intervención del interesado y del procurador fiscal electoral, puede ser solicitada nuevamente después de celebrada la primera elección, cumpliendo con lo dispuesto en el título II.

El partido disuelto no
puede ser reconocido
nuevamente.

2. El partido disuelto por sentencia firme no puede ser reconocido nuevamente, con el mismo nombre, la misma carta orgánica, declaración de principios, programa y/o bases de acción política.

Destino de los bienes
del partido extinguido.

Art. 69. — 1. Los bienes del partido extinguido deben tener el destino establecido en la carta orgánica, y, en caso de que ésta no lo determine, se transmiten a favor del fondo partidario permanente.

2. Los libros, archivos, ficheros y emblemas del partido disuelto pasan a la disposición de la justicia nacional electoral para su custodia, la que, pasados seis años y previa publicación en el Boletín Oficial, por tres días, puede ordenar su destrucción.

TITULO VII

De los partidos preexistentes

CAPÍTULO UNICO

Art. 70. — 1. Los partidos de distrito, nacionales y confederados existentes y reconocidos a la fecha del comienzo de la vigencia de la presente ley orgánica conservan su personalidad jurídico-política y todos los atributos, derechos y poderes inherentes a la misma, en los distritos en que hayan actuado en virtud de aquélla, siempre que soliciten la ratificación de su inscripción ante la justicia nacional electoral y justifiquen:

- a) Que en la elección nacional del 7 de julio de 1963 obtuvieron por lo menos el 3 % del total de los votos válidos emitidos; en un distrito, los partidos de distrito; y en cada uno de tres distritos, los partidos nacionales y los partidos confederados;
- b) Cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3º, parágrafo 1, incisos b) y c), y parágrafo 2; 18 y 19 de la presente ley orgánica;
- c) La adecuación de su organización y funcionamiento a las normas de la presente ley orgánica dentro del plazo de cuatro meses.

2. El incumplimiento de estas condiciones opera la caducidad de la personalidad jurídico-política del partido.

TÍTULO VIII

Del procedimiento partidario electoral

CAPÍTULO PRIMERO

De los principios generales

Caracteres.

Art. 71. — El procedimiento partidario electoral es sumario, verbal y actuado, en doble instancia.

Prueba.

Art. 72. — La prueba se ofrece en la primera presentación y se produce en la audiencia, excepto el caso de denuncia, en el que el procedimiento se imprime de oficio.

Quiénes pueden actuar en el procedimiento partidario electoral.
Acción popular.

Art. 73. — 1. Los partidos reconocidos o en constitución, sus afiliados, cualquier ciudadano por derecho propio o por acción popular y, en su caso, los procuradores fiscales electorales, pueden actuar ante la justicia nacional electoral, según sea su carácter, ya por intermedio de sus autoridades o apoderados, ya en representación del interés u orden público.

2. Si del ejercicio de la acción popular surge que el ciudadano ha actuado con dolo imputable o propósito manifiesto de obstaculizar indebidamente la dinámica partidaria y no en protección del interés público, el juez nacional electoral rechaza la acción sin más trámite.

3. En dicho caso, el juez nacional electoral, cumpliendo con el debido procedimiento legal, puede decidir la inhabilitación del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones generales y partidarias internas, así como la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, hasta por cuatro años.

Art. 74. — La justificación de la personería, a todos los efectos de la presente ley orgánica, se hará mediante copia autenticada del acta o de la resolución de designación o elección, según el caso, de las autoridades o de los apoderados, los últimos de los cuales deben estar inscritos en el padrón electoral de su distrito; o bien poder general o especial otorgado ante escribano público, o acta-poder extendida por ante la secretaría electoral.

Art. 75. — 1. En las actuaciones ante la justicia nacional electoral puede utilizarse patrocinio letrado.

2. Los tribunales de primera y segunda instancia están facultados para exigir el patrocinio letrado cuando lo consideren necesario para la buena marcha del proceso.

Art. 76. — Cuando el tribunal impone costas causídicas, los honorarios únicamente pueden ser percibidos por letrados y procuradores matriculados.

Gratuidad de las actuaciones.

Art. 77. — Todas las actuaciones ante la justicia nacional electoral en cumplimiento de la presente ley orgánica se hacen en papel simple, y las publicaciones dispuestas por ella en el Boletín Oficial sin cargo alguno.

CAPÍTULO SEGUNDO

Procedimiento para el reconocimiento de la personalidad

Verificación de la autenticidad de las firmas y datos.

Art. 78. — El juez nacional electoral competente ante quien se solicite el reconocimiento de la personalidad por un partido en constitución, verifica la autenticidad de las firmas y los datos de hecho invocados en la presentación y la documentación adjunta, arbitran-do los medios procesales idóneos.

Observaciones sobre incumplimiento de la ley y derecho al nombre.

Art. 79. — 1. Realizada la comprobación a que se refiere el artículo anterior, y vencida la publicación dispuesta por el artículo 15, parágrafo 2, el juez nacional electoral convoca a una audiencia, en el plazo de los diez días hábiles siguientes, al procurador fiscal electoral y a los apoderados de los partidos reconocidos o en formación en cada distrito.

2. Aquéllos están habilitados, en ese comparendo verbal, para formular observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por la presente ley orgánica, o referentes al derecho, registro o uso del nombre partidario propuesto; debiendo concurrir con las pruebas en que se fundamente; esto sin perjuicio del ejercicio del ministerio público por vía de dictamen.

3. Los comparecientes a la audiencia antes indicada tienen el derecho de apelar.

Concesión o denegación de la personalidad.

Art. 80. — 1. Cumplidos los trámites necesarios, o en su caso intimación, el juez nacional electoral, mediante auto fundado, procede a conceder o denegar la personalidad solicitada, dentro de los diez días hábiles de cumplidos dichos trámites.

2. Si se concede el reconocimiento, ordena publicar en el Boletín Oficial, por un día, el auto respectivo y la carta orgánica del partido.

Recurso de apelación.

Art. 81. — 1. De toda resolución definitiva o que decida artículo, del juez nacional electoral, las partes interesadas en el proceso, en defensa de sus derechos, y el procurador fiscal electoral, pueden apelar dentro del término de cinco días hábiles para ante la Cámara Nacional Electoral.

2. Este recurso se concede en relación y a los efectos regulados en los artículos subsiguientes.

CAPÍTULO TERCERO

Del procedimiento partidario electoral contencioso

Primera instancia

Art. 82. — 1. Iniciada la causa en defensa de derecho público subjetivo, interés u orden público, por vía de acción, denuncia o de oficio, se corre traslado a los interesados por tres días hábiles. Producida la contestación o ante el silencio, el juez nacional electoral convoca audiencia dentro de los cinco días hábiles, bajo apercibimiento de celebrarse con la parte que concurra, debiendo expedirse en el plazo de diez

días hábiles de realizada aquélla. La incompetencia o la falta de personería del representante pueden resolverse previamente.

2. El procurador fiscal electoral, o en su caso el procurador fiscal federal del juzgado a cargo del registro cívico, o quien lo sustituye, dictamina en la audiencia o dentro de los tres días hábiles de celebrada aquélla.

3. Los términos establecidos por la presente ley orgánica son perentorios. No obstante, durante el proceso comicial, la justicia nacional electoral puede aplicar los plazos determinados por la legislación electoral, cuando sea justificada la urgencia.

Segunda instancia

Recurso de apelación.

Art. 83. — 1. De toda sentencia o resolución definitiva que decida artículo, del juez nacional electoral, puede apelarse dentro del plazo de cinco días hábiles, por ante la Cámara Nacional Electoral, excepto en el caso previsto por el artículo 61 de la ley electoral.

2. La apelación se concede en relación y al sólo efecto devolutivo. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral, a solicitud del procurador general electoral o de parte interesada, puede establecer que el recurso tenga también efecto suspensivo.

Constitución de domicilio.

Art. 84. — 1. Al interponer el recurso ante el juez nacional electoral, las partes interesadas constituyen domicilio en jurisdicción de la Capital Federal.

2. Caso contrario, al concederse el recurso, son intimadas a hacerlo dentro de los cinco días hábiles de la fecha de la providencia de recibidos los autos en la Cámara Nacional Electoral, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en sus estrados por dicho tribunal.

Presentación de memorial.

Art. 85. — 1. Recibidos los autos en la alzada, el secretario actuante da cuenta al tribunal y, cumplidas las medidas previas, se dispone sin más trámite, por la presidencia, que se pongan aquéllos en secretaría o se fija audiencia, a fin de que las partes, en el término de cinco días hábiles, puedan presentar un memorial sosteniendo o mejorando su recurso. Dicho tribunal puede disponer mediante probatorias y para mejor proveer, así como comparendos verbales.

2. Agregados los memoriales y previo dictamen del procurador general electoral, pasa el expediente al acuerdo para resolver o dictar sentencia.

3. Si el apelante no presenta memorial la cámara puede declarar desierto el recurso o avocarse a su conocimiento si estima que la cuestión requiere por su naturaleza una decisión.

Recursos de queja por retardo o denegación de justicia y de aclaratoria.

Art. 86. — 1. En el recurso de queja por retardo o denegación de justicia, vencidos los términos legales, el interesado formaliza el pedido de pronto despacho, y luego de tres días queda habilitado para ocurrir ante el superior.

2. En igual término se interpone la queja por denegarse una apelación.

3. La aclaratoria de las sentencias definitivas es interpuesta, en ambas instancias, dentro de las veinticuatro horas de la notificación.

Art. 87. — Declarada la nulidad de una sentencia o resolución definitiva que decida artículo, la cámara dispone que los autos pasen al juez que siga en orden de turno o al subrogante legal, para que dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

Juan S. Palmero.

—A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda.

II

Comunicación del Honorable Senado

El Honorable Senado comunica la designación de los señores senadores Martínez Garbino, Aguirre Lanari y De Rege para integrar la Comisión Especial bicameral que proyectará una ley que establezca la fecha de iniciación de los mandatos de los actuales legisladores nacionales. (Al Archivo.)

III

Proyectos de ley

1

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyense las cantidades de tres mil pesos (\$ 3.000) y sesenta mil pesos (\$ 60.000) previstas en el artículo 8º, inciso a) de la ley 9.688, por las de quince mil pesos (\$ 15.000) y trescientos mil pesos (\$ 300.000), respectivamente.

Art. 2º — Sustitúyese el inciso d) del mismo artículo por el siguiente:

d) La incapacidad temporal producida por el accidente se indemnizará desde el día del infortunio hasta aquel en que la víctima se halle en condiciones de volver al trabajo con una indemnización diaria igual al setenta y cinco por ciento (75 %) de su jornal, y cuando esa incapacidad exceda al ciento por ciento (100 %) de su jornal desde el sexagésimo primer día, de acuerdo a los días laborables del convenio de aplicación. Pasado el término de un año la incapacidad se considerará como permanente a los efectos de la indemnización, y si además resultara absoluta, no se descontarán de su liquidación los valores entregados a título de indemnización temporal durante ese lapso.

Art. 3º — Agrégase al artículo 17 de la ley 9.688 el siguiente párrafo: «Para iniciar la acción de indemnización especial deberá acompañarse copia del acta de la junta de reconocimiento médico designada por la autoridad administrativa correspondiente e integrada con médicos que representen al accidentado y al empleador o entidad aseguradora subrogante, con indicación del porcentaje en su caso, cuya acta, si no contuviere disidencia, constituirá prueba sobre el punto.»

Art. 4º — Sustitúyese el inciso c) del artículo 20, de la ley 9.688, por el siguiente:

c) Ajustarse en todo lo referente a tarifas, pólizas, reservas, capitales y demás requisitos técnicos a lo establecido en el régimen legal y disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Seguros de la Nación.